

Official

DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

Parte oficial:

S. M. la Reina nuestra Señora (q. D. g.) y su augusta Real familia continúan en el Real Sitio de San Ildefonso sin novedad en su importante salud.

REAL DÉCRET

De conformidad con lo propuesto por el Ministro de Fomento, oído el dictámen del Consejo de Estado.

Vengo en aprobar el adjunto reglamento para la aplicacion de la ley de 11 de julio de 1866 sobre fomento de la poblacion rural.

Dado en San Ildefonso á 12 de agosto de 1867.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de Fomento, Manuel de Orozco.

REGLAMENTO

PARA LA APLICACION DE LA LEY DE 11
DE JULIO DE 1866 SOBRE FOMENTO DE
LA POBLACION RURAL.

CAPITULO PRIMERO.

Condiciones que han de tener las caserías,
y medios que deben emplear sus dueños
para optar á los beneficios de la ley.

Artículo 1.º Para que los beneficios de la ley de 11 de julio de 1866 sobre fomento de población rural puedan ser aplicables á las caserías que se formen, deberán estas reunir las condiciones siguientes:

1.ª Que todo su terreno esté dedicado al cultivo de cereales, viña, arbolado, prados, cria de ganado ó cualquier otro ramo de agricultura en una ú otra combinación.

2.ª Que la extensión de la casería no pase de 200 hectáreas.

3.^a Que cada una de las que se formen, tengan en cualquier punto del terreno que las constituya uno ó mas edificios habitados y dedicados á las industrias agrícolas durante todo el año, salvo los casos que la ley expresa.

4.ª Que los edificios disten dos kilómetros cuando menos del pueblo, aldea ó lugar mas próximos.

5.ª Que los edificios y terrenos formen un conjunto indivisible, y permanezcan unidos.

nezcan por lo menos en este estado durante el tiempo que, según sus circunstancias, disfruten de los beneficios de la ley.

Art. 2.º Cuando cinco ó mas caserías, por razon de las condiciones especiales de su situacion, se agrupen de modo que algunas de ellas no tengan el edificio dentro de sus mismas tierras de labor, disfrutarán tambien de los beneficios de la ley siempre que sus tierras se hallen colindantes con las de aquella donde esté enclavado el edificio, y con tal que reunan tambien las demas condiciones del art. 5.º de la ley. Pero no habrá lugar á tales beneficios si hubiere otras tierras ó caseríos intermedios: i

Art. 2.º Todo propietario que pretenda obtener la concesion de alguno ó algunos de los beneficios que la ley dispensa presentará una instancia al Gobernador de la provincia en que exprese lo que desea alcanzar. Acompañarán la instancia los documentos siguientes:

1.º Un plano anejo á escala de 1/5000 por lo menos, formado por un Plano agimensor ó por cualquier otro facultativo que tenga título análogo. En el plano estará representada la casería con sus edificios y tierras, marcando estas con signos que den á conocer distintamente la clase de cultivo á que están dedicadas.

2.ª Una memoria descriptiva de la finca y sus límites, declarando en ella dicho facultativo bajo su responsabilidad el número de hectáreas que abraza, con expresión del que tiene dedicadas á cada cultivo, y la distancia que hay desde el edificio ó edificios de la casería á la extrinseccionalidad de la población mas inmediata.

3.ª Una relación autorizada por el Secretario del Ayuntamiento, con el Visto Bueno del Alcalde, en que aparezcan los nombres de los colonos ó arrendatarios que se hallen empadronados en la casería, expresando su sexo, naturaleza, edad, estado, profesion civil; y si fuesen varias las caserías, se hará constar el número de cada casa y la porcion de terreno que le está asignado.

Art. 4.º La memoria de que habla el artículo anterior será auto-izada con el sello del Ayuntamiento y V.º B.º del Presidente de la corporacion si no resultase en la Municipalidad nada en contrario, pero si resultare, se expresarán las inexactitudes cometidas por el Perito, precisando solamente de qué condiciones o condiciones de las señaladas en el art. 1.º carece la finca.

Art. 3.º Así la relación certificada como la autorización de la memoria, y cualquier otro documento que los interesados reclamen de los Alcaldes, se de-

berán expedir por dichas Autoridades en el preciso é improrrogable término de ocho dias; debiendo exigirse á los Alcaldes la mas estrecha responsabilidad si faltaren á lo dispuesto en este artículo.

Art. 6.º La solicitud y documento antedicho serán presentados á la Sección de Fomento respectiva, cuyo Jefe comunicará de oficio al interesado el día en que se hayan recibido.

Art. 7.º Si en el expediente se hubiere omitido la declaración y justificación de alguna de las circunstancias prescritas en el art. 1.º ó 2.º de este reglamento, se pondrá inmediatamente en conocimiento del interesado para que subsane la omisión.

Art. 8.º Si los justificantes unidos á la instancia fueren impugnados por el Ayuntamiento ó Alcalde que debiera autorizarlos, nombrará el Gobernador un individuo de reconocida competencia en el particular para que opina su dictamen sobre el punto que fuere objeto de oposicion.

Art. 9.º Los derechos que derengue el Perito á que se refiere el artículo anterior serán abonados por el interesado si resultare que no eran exactos dichos justificantes, sin perjuicio de exigir la responsabilidad que corresponda al funcionario ó facultativo que hubiese autorizado el documento impugnado y en caso contrario los abonará la Autoridad que se hubiere opuesto sin fundamento verdadero.

Art. 10. El Gobernador elevará el expediente con su informe al Gobierno dentro de los ocho dias siguientes á aquel en que se hubiese recibido la solicitud del interesado, ó en que se hubiere completado la instruccion del expediente, con arreglo á lo dispuesto en los articulos anteriores.

Art. 11. Si el Gobernador estimase conveniente oír antes de emitir su informe á la Junta provincial de Agricultura, Industria y Comercio, se ampliará el plazo ocho días mas para que tenga efecto este trámite.

Art. 12. En el caso de reclamarse por algun tercero contra la pretension del interesado, el Gobernador oirá precisamente al Consejo provincial, disponiendo para este efecto de otros ocho dias si hubiese utilizado los ocho de que trata el articulo precedente. Del informe del Consejo provincial remitirá una copia autorizada al Gobierno.

Art. 13. También deberá ser oída la Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de Estado dentro de otra plazo igual en el caso á que se refiere el artículo anterior.

Art. 11. Recibido el expediente en el

Ministerio de Fomento, se pasará á informe de la primera Sección del Real Consejo de Agricultura, Industria y Comercio, la cual deberá evacuarlo dentro de los 15 días siguientes á aquel en que los reciba.

Art. 15. Evacuado el informe de la primera Sección del Real Consejo de Agricultura, Industria y Comercio, y en su caso el de la Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de Estado, el Ministro de Fomento propondrá á S. M. la resolución.

CAPÍTULO II.

De la aplicacion de los beneficios otorgados por la ley, y de las formalidades que deben tener las Autoridades y personas en ellos interesadas

Art. 16. Cuando el dueño de una finca mayor de 500 hectáreas hubiera reducido á caserías, con sujeción á la ley y al presente reglamento, la mitad de aquellas, y quisiera establecer con la otra mitad otra gran casería ó granja de extensos cultivos, se declararán á su favor, si lo lleva á cabo, los mismos privilegios y ventajas que la ley otorga á las caserías; pero en este caso la extensión de terrenos de la granja no podrá exceder de la que tenga el total de las caserías formadas por el dueño en el resto de su finca.

Art. 17. Los plazos para el disfrute de los beneficios que concede la ley empezarán á contarse desde la fecha en que se comuniquen al interesado la concesión

Art. 18. El concesionario deberá acreditar en el Gobierno civil de la provincia al principio de cada año, por medio de certificación del Alcalde del término jurisdiccional, que los edificios han sido habitados y las tierras cultivadas en el año precedente, ó bien los huecos y suspensión de labores que hubiese tenido, con expresión de sus causas, así como las transmisiones de dominio ó de cualquiera otra clase que hubiesen ocurrido durante el mismo período.

Art. 12. Cuando el concesionario lo crea conveniente á sus intereses, podrá solicitar del Gobernador, y este aceptarlo oyendo al Ayuntamiento del distrito y á la Junta de Agricultura, Industria y Comercio, una nueva division de caseríos.

Si el Gobernador negase la pretension, el interesado podrá alzarse de la providencia acudiendo al Ministerio de Fomento, por el que se resolverá lo que corresponda.

Art. 20. Los Gobernadores expedirán las licencias de uso de armas en favor de los concesionarios y demás personas de las caserías, dando noticia a los Alcaldes de los distritos municipales.

para su conocimiento y á fin de que vigilen su uso.

Art. 21. Siempre que se declare una casería con opción á los beneficios de la ley, se procederá por la Municipalidad en cuyo término se halle enclavada aquella á abrir un registro especial en el cual serán inscritos y empadronados los dueños, arrendatarios ó mayordomos que la habiten con sus familias respectivas, detallándose en él toda la circunstancia que expresa el art. 3.º en su párrafo tercero.

Art. 22. De la inscripción ó empadronamiento se remitirá copia literal al Gobernador de la provincia á fin de que tome razón de ella la sección correspondiente, y se anote en el libro que al efecto deberá llevar la misma, donde consten las alteraciones que sufra el vecindario de las caserías privilegiadas de toda la provincia, teniendo especial cuidado de hacer constar la fecha en que los colonos empezaren á habitarlas y cultivarlas.

Art. 23. Los mozos inscritos en el padron especial de vecinos de alguna casería que dejen de residir en ella el tiempo que marca el art. 4.º de la ley en sus párrafos tercero y cuarto respectivamente perderán el derecho á los beneficios que por el mismo se les concede si la mudanza hubiere sido voluntaria, ó hubieren dado motivo justificado para ser despedidos por el dueño ó jefe de la finca.

Art. 24. Los que se hallaren disfrutando el beneficio de la reserva, si mudasen su domicilio á otra localidad que no gozase de esta ventaja, ingresarán en el ejercicio activo, con arreglo al art. 4.º de la ley, salvo el caso previsto en el artículo anterior.

Art. 25. Disfrutarán el beneficio de vecindad y demás á que se contrae el artículo 6.º de la ley, no solo los dueños de las caserías, sino los arrendatarios ó mayordomos en sus casas respectivas. Concederá estos beneficios el Gobernador de la provincia tan luego como sean solicitados por los propietarios que prometan construir algún edificio ó edificios con objeto de formarlos, señalándoles un plazo prudencial para el cumplimiento de su compromiso.

Art. 26. Corresponde á los Gobernadores, oyeando á los Ingenieros Jefes del cuerpo de Caminos, Canales y Puertos, designar los Ingenieros ó Ayudantes del ramo de Obras públicas que hayan de practicar los trabajos á que se refiere el art. 7.º de la ley, en caso de que lo soliciten los propietarios de grupo ó pueblos de 50 ó mas casas en uso del derecho que les concede dicho artículo.

En la orden de autorización que al efecto se expida expresarán los Gobernadores el tiempo de duración del encargo con arreglo á lo que sobre el particular expongan previamente los Ingenieros Jefes, y se determinarán también las dietas que han de satisfacerse á los Ingenieros ó Ayudantes, á tenor de las disposiciones vigentes sobre el particular.

Art. 27. Si no hubiera facultativo alguno de quien valdiese para esta clase de servicios lo expondrán los Gobernadores á la Direccion general de Obras públicas, la que proveerá lo que corresponda en un término que no podrá exceder de un mes, participándole al Gobernador respectivo para conocimiento de los peticionarios.

Art. 28. A fin de evitar preferencias que puedan caer en perjuicio de los particulares y en menoscabo del buen nombre de la Administracion pública, llevarán los Gobernadores un orden riguroso de antigüedad en el despacho de las solicitudes que se promuevan reclamando la cooperación del personal facultativo de Obras públicas con destino á los trabajos que expresa el art. 7.º de la ley.

Art. 29. Los nombramientos del personal con que el Gobierno debe auxiliar á las poblaciones que se hallen compren-

diadas en el art. 8.º de la ley se harán por el Ministerio de Fomento y Direccion general de Agricultura, Industria y Comercio, en individuos que reúnan las circunstancias que previenen las disposiciones vigentes.

El nombramiento de párroco será interino hasta tanto que, dado conocimiento al Ministro de Gracia y Justicia, acuerde este, lo que corresponda para que se provea dicha plaza canónicamente, y se incluya en el presupuesto general del clero la asignacion que al Curato corresponda segun los casos, y los gastos del sostenimiento del culto.

Art. 30. Los que obtengan las plazas de Médico, Cirujano, Veterinario, Maestro y Maestra de Instrucción primaria quedarán sujetos á la eventualidad de los distintos fondos sobre que han de pasar sus haberes transcurridos los primeros 10 años que la ley los declara de cuenta del Estado.

Art. 31. Los Médicos, Cirujanos y Veterinarios que se se nombren por el Ministerio de Fomento para el servicio de las nuevas poblaciones rurales contraen los deberes y obligaciones que impone á los Facultativos titulares la ley de 28 de noviembre de 1855.

Art. 32. Los dueños de las caserías que constituyan las poblaciones rurales á que se refiere el art. 8.º de la ley podrán anticipar, previa la autorización superior, el importe de los gastos que ocasiona el sostenimiento de la iglesia y Párroco, Médico, Cirujano y Veterinario, Maestro y Maestra de Instrucción primaria, hasta tanto que se consigne en los presupuestos generales del Estado la cantidad necesaria para dicho objeto, en cuyo caso se dispondrá por el Gobierno el correspondiente reintegro.

Art. 33. Para que los particulares que hubiesen solicitado ó solicitaren establecer colonias en sus propiedades, con arreglo á la ley de 21 de noviembre de 1855, puedan optar á los beneficios que concede la que motiva el presente reglamento, es indispensable que justifiquen hallarse dentro de las condiciones prescritas en ambas.

San Ildefonso 12 de agosto de 1867.—Aprobado por S. M.—Orovio.

(Gaceta de 28 de agosto último.)

GOBIERNO DE PROVINCIA.

CIRCULAR NÚM. 302.

Dictando reglas sobre apreciacion de las utilidades de riqueza inmueble del cultivo y de la ganadería.

Secretaría de Hacienda.

La Direccion general de Contribuciones en 12 del corriente me dice lo que sigue:

«Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á esta Direccion general con fecha 4 de setiembre último la Real orden que sigue:

«Hmo. Sr.: Enterada la Reina (q. D. g.) de la instancia fecha 15 de junio último, en que D. Juan José Luxán y otros, vecinos de Castuera, han apelado á este Ministerio del acuerdo dictado por V. I. en 21 de setiembre del año próximo anterior, en el expediente incoado á virtud de reclamacion de D. Manuel y D. Pedro Lopez de Ayala, contribuyentes del mismo distrito municipal, por agravios inferidos en el amillaramiento de la riqueza sujeta á la contribucion de inmuebles, cultivo y ganadería.

Visto lo propuesto por esa Direccion general:

Considerando que entre la fecha del acuerdo apelado y de la apelacion ha trascurrido un periodo de tiempo que excede á todos los plazos fijados por la legislacion de Hacienda para acudir de una instancia á la superior inmediata en la via administrativa y en la contenciosa:

Considerando que en las cuestiones de apreciacion de las riquezas inmueble y pecuaria no procede la contenciosa segun el párrafo 3.º de la Real orden de 20 de setiembre de 1852, ni son aplicables las reglas dictadas en la de 30 de marzo del año actual, puesto que no afectan directamente á la Administracion:

Considerando los inconvenientes morales y materiales que pueden seguirse de dejar indefinidamente abierta la via administrativa:

Considerando que las pruebas periciales á que se someten las reclamaciones de agravio no son fidedignas, sino en la época en que se entabla la queja, en atencion á las profundas alteraciones que el transcurso del tiempo y la voluntad de los propietarios pueden introducir en los predios y granjerías sujetos á la contribucion territorial:

Considerando que la circular de ese Centro directivo de 6 de noviembre de 1852 no marca ni pudo marcar otro plazo que el de apelacion á los Gobernadores de provincia, de los acuerdos de los Ayuntamientos y Juntas provinciales;

Y considerando, por último, que no existe ninguna otra disposicion en que se fijen las instancias sucesivas en las cuestiones sobre apreciacion de la riqueza imponible, S. M., sin perjuicio de resolver como lo ha hecho en esta misma fecha en el expediente de su referencia, el recurso de D. Juan José Luxán y otros vecinos de Castuera, se ha servido dictar, conformándose con lo propuesto por esa Direccion general, las siguientes reglas:

1.º Las cuestiones sobre apreciacion de las utilidades de la riqueza inmueble, del cultivo y de la ganadería, continuaran sometiéndose al conocimiento y fallo de las autoridades á quienes en cada caso competa por la legislacion del ramo.

2.º Los acuerdos de los Gobernadores de provincia serán apelables ante la Direccion general de Contribuciones en el plazo de 30 dias, y en el de 60 los de este Centro directivo ante el Ministerio de Hacienda.

3.º Estos plazos empezarán á contarse respectivamente desde la fecha en que se comuniquen á los interesados y corporaciones municipales la providencia administrativa apelable.

4.º Las autoridades que las dicten cuidarán de que sean comunicadas en forma que no permita alegar falta de conocimiento, dándolo igualmente del recurso inmediato que corresponda y del plazo señalado para ejercitarlo.

5.º El transcurso de los plazos

marcados sin intentar la apelacion, dará el carácter de definitivo á la última providencia, y dejará sin curso toda reclamacion ulterior que se intentase.

Y 6.º Para los asuntos á que sean aplicables las reglas procedentes y puedan encontrarse en esta fecha fallados en una instancia intermedia, empezarán á contarse los plazos expresados desde el día en que se publique esta Real disposicion en la Gaceta de Madrid.

De Real orden lo digo á V. I. para su inteligencia y demas efectos.

Lo que he dispuesto hacer público por medio de este periódico oficial para los fines consiguientes. Orense setiembre 18 de 1867.

El Gobernador,

Lucas Garcia de Quiñones.

CIRCULAR NÚMERO 303.

Dando cuenta de la toma de posesion del Visitador del papel sellado D. Juan Manuel Colmenero.

Secretaría de Hacienda.

Nombrado D. Juan Manuel Colmenero, Visitador de la Renta de papel sellado de esta provincia, por orden de la Direccion general de Rentas Estancadas y Loterías fecha 1.º de julio último, se ha posesionado oportunamente de su destino; y mediante aquel vá á proceder á la visita cumpliendo con los deberes de su cargo, lo anuncio en este periódico oficial para que llegue á conocimiento de todos los funcionarios que deban ser visitados, con arreglo á lo que dispone el art. 82 de la Instrucion de 12 de setiembre de 1861.

Orense 20 de setiembre de 1867,

El Gobernador,

Lucas Garcia de Quiñones.

ADMINISTRACION

DE HACIENDA PUBLICA

DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

La Direccion general de Rentas Estancadas y Loterías, con fecha 14 del actual me dice lo siguiente:

«La calificación que se hace en las Fábricas de Tabacos de los que procedentes de aprehensiones remiten las Administraciones de Hacienda pública, viene siendo objeto de continuas quejas á que esta Direccion general desea poner término. En opinion de los interesados en esas aprehensiones, se declaran muchas veces inútiles para toda clase de labores, tabacos que tienen condiciones utilizables; y como desde el punto en que esa opinion existe, por poco fundada que sea, daña el concepto moral de los funcionarios calificadores, á la vez que infunde el desaliento en los encargados de la persecucion del fraude, que temen no reportar el premio debido, del penoso trabajo que ese servicio exige, es indispensable dictar una medida que ponga á los unos á cubierto de toda desconfianza, y garantice á los otros de que el derecho á la participacion que la ley les concede, en los efectos decomisados, no puede dejarse ilusorio, sin causa legítima y con completa conciencia de que es así procedente.

Este resultado se obtendrá sin duda alguna concediendo á los aprehensores del referido artículo, la intervencion en los actos de calificación de que se quejan,

y en la inutilización de los efectos calibrados cuando proceda, con derecho á protestar del primer, si por él se consideran perjudicados en sus intereses; y á fin de que así se verifique en lo sucesivo, esta Superioridad ha acordado las siguientes reglas:

1.º Los Cuerpos de Carabineros del Reino, Guardas Costas y Guardia Civil, podrán designar en las poblaciones donde hay establecidas Fábricas de Tabacos, un individuo de su seno con residencia en las mismas, para que en representación de los aprehensores, asista al reconocimiento y calificación de los tabacos decomisados, conformándose ó no con ella.

2.º Los Administradores de las fábricas darán aviso escrito á dichos representantes, con 24 horas de anticipación, cuando menos, del día y hora en que haya de tener lugar aquel acto.

3.º Si trascurrida una hora después de la señalada, no hubiese concurrido el representante de los aprehensores, se hará la declaración que proceda, sin que en este caso le quede derecho á reclamación alguna, haciéndose constar esta circunstancia en el acta que se extienda.

4.º Si, concurriendo, no se conformase con la calificación de los peritos, presentará en el término de tres días al Administrador de la fábrica, un escrito en que manifieste las razones que para ello tenga, quien lo remitirá en seguida á esta Dirección general con muestras del tabaco elegidas y precintadas á presencia de aquel, para que la misma resuelva sin ulterior recurso.

5.º Siempre que hayan de utilizarse ó quemarse los tabacos declarados inútiles, se avisará á los representantes de los aprehensores en la forma y plazos prescritos en las reglas 2.ª y 3.ª, para que se cercioren de haberse practicado legalmente dichas operaciones, firmando también el testimonio que de ello debe extenderse.

7.º Si las aprehensiones se hubiesen hecho por individuos de cualquiera otra corporación, ó por particulares, las Juntas administrativas, al darles conocimiento del fallo declarando el comiso, les advertirán del derecho que tienen á estar representados en las Fábricas, cuando se haga el reconocimiento y calificación del género aprehendido, para que manifiesten en el acto si quieren ó no hacer uso de él.

8.º Su determinación se hará constar en el acta, y si es afirmativa, manifestarán á la Administración, en el término de 3.º día y por escrito, el nombre y señas donde habite la persona que al efecto autoricen, para que se cumpla por las Fábricas lo dispuesto en las reglas 2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª y 6.ª, pasados los cuales, se tendrá por renunciado el derecho.

9.º Los Administradores de Hacienda pública, al enviar á las Fábricas los efectos decomisados por particulares, ó individuos de corporaciones distintas de las que se determinan en la regla 1.ª, consignarán precisamente en los oficios de envío de las remesas, el nombre y señas de la habitación de la persona que haya de representarles, ó en otro caso que los interesados han renunciado á ese derecho.

Lo que se publica en el Boletín oficial de la provincia para gobierno y conocimiento de todos los individuos á que se refiere la presente comunicación que tomen parte en las aprehensiones de tabacos. Orense 18 de setiembre de 1867. — Florentino M. de Murga.

ANuncios OFICIALES.

Alcaldía de Orense.

El domingo 22 del actual á las doce de su mañana, tendrá efecto en las casas

de Ayuntamiento de esta capital y de San Ciprian de Viñas por doble y simultánea subasta y de efecto la mejor proposición que resulte en ambas, la contrata de un ponton sobre el rio Barbaña entre los pueblos de Sejalvo y expresado San Ciprian con arreglo al presupuesto y condiciones que estarán de manifiesto en la Secretaría de uno y otro Ayuntamiento.

Lo que se hace público para conocimiento de todos los que quieran tomar parte en dicha contrata.

Orense setiembre 6 de 1867. — Bernardo María Pedrayo.

Universidad literaria de Santiago.

Habiéndose servido declarar la Dirección general de Instrucción pública en orden de 10 del actual, que puedan admitirse en esta Universidad á la matrícula de primer año de Medicina, á todos los que reuniendo los requisitos legales que exigen las disposiciones vigentes lo soliciten, bien cursen dicho primer año con objeto de hacerse á su tiempo Facultativos de segunda clase ó con el de alcanzar la Licenciatura en la Facultad, he acordado publicar esta superior resolución; entendiéndose en su consecuencia ampliado el anuncio de la matrícula para los cursantes que pretendan seguir la carrera de Medicina en toda su extensión, los cuales deberán únicamente justificar que han hecho todos los estudios de segunda enseñanza y tener el grado de Bachiller en Artes ó estar en aptitud de recibirlo, quedando tan solo subsistente para los que pretendan seguir la carrera de Facultativos de segunda clase con arreglo al art. 7.º del Real decreto de 7 de noviembre de 1866, la obligación de acreditar la edad de 17 años además de los estudios que en el mismo artículo se prescriben.

Santiago 16 de setiembre de 1867. — El Rector, Juan José Viñas.

Intendencia militar de Galicia.

El Intendente de división y del distrito militar de Galicia.

Hace saber: que no habiendo tenido efecto el remate anunciado el 11 de agosto próximo pasado por falta de licitadores, con objeto de contratar por un año el suministro de provisiones á las tropas y caballos del ejército y Guardia civil estantes y transeúntes por la ciudad de Orense, se convoca de nuevo para el día 28 del corriente á la una de la tarde, bajo las mismas condiciones y circunstancias fijadas en el anuncio de 11 del referido agosto de que queda hecho mérito.

Coruña 17 de setiembre de 1867. — Carlos Clavijo. — El Comisario de Guerra, Secretario, José de Santiago Palomares.

PROVIDENCIAS JUDICIALES.

Don Rafael de Murga y Murgátegui, Teniente de la 4.ª compañía del 2.º batallón del regimiento de Guadalajara número 20 y Fiscal en comisión.

Habiéndose presentado del pueblo de Laza, y no hallándose en las aguas del Carbajalino donde se decía estaba Don Ricardo Oterino Enriquez, comerciante, averiguado en Laza, á quien está procesando por resultar complicado en la sustracción que se instruye en averiguación de la falta de fidelidad y conato de rebel-

lion en que hayan podido incurrir algunos individuos de la segunda compañía de la Comandancia de Carabineros de esta provincia; usando de las facultades que S. M. tiene concedidas en estos casos á los Oficiales de su ejército, por el presente llamo, cito y emplazo al citado Don Ricardo Oterino Enriquez por segundo edicto y pregon, señalándole la cárcel pública de esta ciudad, donde deberá presentarse personalmente dentro del término de tres días que se cuentan desde el día en que se fijó al público este edicto á dar sus descargos y defensas; de no comparecer al referido plazo se seguirá la causa y sentenciará en rebeldía por el Consejo de Guerra, sin más llamarle ni emplazarle por esta la voluntad de S. M. Fijese y pregónese este edicto para que llegue á noticia de todos.

Orense 17 de setiembre de 1867. — Rafael de Murga. — Por su mandato, el Escribano de la causa, Francisco Ruiz.

D. Benigno Taboada, secretario del juzgado de paz de Irijo.

Certifico que en este juzgado á instancia de Andres Conde, vecino de la parroquia de Dadin, se celebró juicio verbal contra José Nogueira de Baldesciro, parroquia de Ciudad, en el que recayó la sentencia que á la letra dice:

Sentencia. — En el día 27 de octubre de 1866, el Sr. D. José Pérez, primer suplente de este Ayuntamiento, habiendo visto estos autos de juicio verbal entre Andres Conde demandante, contra José Nogueira, demandado, en reclamación de cuatro ferrados de centeno y 10 reales en dinero, por autenti secretario dijo:

Resultando que Andres Conde, labrador y vecino en la parroquia de Dadin, como apoderado de Doña Vicenta Pimentel, propietaria y vecina en la parroquia de Santolonga, Ayuntamiento de Santiso, partido judicial de la Arzua, demandó en juicio verbal á José Nogueira, también labrador y vecino del lugar de Baldesciro, parroquia de Ciudad, en reclamación de cuatro ferrados de centeno, por los años de 65 al 66 ambos inclusive y á razón de un ferrado en cada un año y además 10 rs. por mitad de una gallina cebada que le corresponde del año de 1855, concluyendo á que se le condenase al pago con costas.

Resultando que el demandado no compareció el día y hora que estaba señalado para la celebración de este juicio, y por el demandante se pidió se declarase en rebeldía, teniendo por contestada la demanda se continuase el juicio, todo lo que fué estimado por el juzgado.

Resultando que el demandante pidió que el demandado jurase indecisoriamente sobre la certeza de su reclamación y para que tuviese efecto se libróse orden para que compareciese á prestarlo el día y hora que el juzgado tuviese á bien señalar, suspendiendo en el interin el acta; todo lo que estimó el juzgado y señaló el 26 del corriente y hora de diez de su mañana, librando la orden oportuna.

Resultando que el día y hora señalados se presentó el demandante sin que lo hubiese hecho el demandado, y por el primero se pidió la continuación del juicio y suministró prueba testifical, la que fué admitida por el juzgado; y en su consecuencia, y el demandante se separó de dar mas prueba y el juzgado dió el acto por terminado.

Considerando que de la prueba suministrada, aparece que José Nogueira es pagador de un ferrado de centeno anual á la casa de Chedas y como derivante de esta á Doña Vicenta Pimentel de la que es apoderado Andres Conde segun aparece en el poder que dió fe el escribano Don Benito Carrero y Esgide, notario del colegio de la Coruña y habilitado por el Lic. D. Jacinto Taboada de Carbajalino, y además una gallina cebada de dos en dos años, y por lo tanto la mitad cada un año de esta,

Falla que debe de condenar y condena á José Nogueira al pago de los cuatro ferrados de centeno y los 10 rs. de la gallina cebada á Andres Conde como apoderado de Doña Vicenta Pimentel; sin perjuicio de legítimas datas que el Nogueira tenga á su favor, imponiéndole á éste todas las costas ocasionadas. Y por esta así definitivamente juzgando, lo mandó y firmó de todo lo que certifico. — José Pérez. — Benigno Taboada, secretario.

Y para que tenga efecto su inserción en el Boletín oficial de la provincia, segun lo previene el art. 1190 de la ley de Enjuiciamiento civil, libro la presente certificación que firmo previo el visto bueno del señor juez en Irijo á 31 de agosto de 1867. — Benigno Taboada, secretario. — V.º B.º — Angel Torres.

D. Benigno Taboada, secretario del juzgado de paz de Irijo.

Certifico que en este juzgado á instancia de Domingo Pul, vecino de Santolonga en el Ayuntamiento y partido de Lalin, se celebró juicio verbal contra Juan Rodríguez, vecino del lugar de la Fraga, parroquia de San Cosme de Cuadra, en el que recayó la sentencia que á la letra dice:

Sentencia. — En el día 26 de noviembre de 1866 D. José Pérez, primer suplente de este juzgado de paz, habiendo visto estos autos de juicio verbal entre Domingo Pul demandante y Juan Rodríguez demandado en reclamación de 60 reales, por autenti secretario dijo:

Resultando que Domingo Pul, propietario y vecino de Santolonga en el Ayuntamiento y partido de Lalin, demandó en juicio verbal á Juan Rodríguez, labrador y vecino de la Fraga, parroquia de San Cosme de Cuadra en reclamación de 60 rs. procedidas de fierro que le compró, sin perjuicio de lo que le resultase de otra reclamación, sin sujeción al plazo, concluyendo á que se le condenase al pago con costas.

Resultando que habiéndose señalado día y hora para la celebración de este juicio, el demandado no se presentó á pesar de estar notificado y por el demandante se pidió se declarase en rebeldía y se continuase el juicio, todo lo que admitió el juzgado, lo mismo que se libróse orden para que el demandado prestase juramento indecisorio y se señaló nuevo día y hora á solicitud del actor;

Resultando que el nuevo día y hora señalados, se presentó el actor y no el demandado y por aquel se pidió nueva orden para que compareciese otro día y hora que el juzgado tuviese á bien señalar para evacuar dicho juratorio, y caso de no se presentar á evacuarlo, declararlo confeso, todo lo que estimó el juzgado.

Resultando que el día hora últimamente señalados, se presentó el actor sin que lo hubiese hecho el demandado á pesar de haber sido citado, y por aquel se pidió se declarase confeso, dando esta acta por terminada lo que se estimó;

Considerando que el demandado no se presentó á contradecir la reclamación que suena en esta demanda, ni menos á prestar el juratorio pedido á pesar de lo obstar, por lo que resulta de las diligencias practicadas en persona, de lo que se deduce ser cierta dicha reclamación;

Falla que debe de condenar y condena á Juan Rodríguez demandado al pago de los 60 rs. con costas. Y por esta definitivamente juzgando, así lo determina y firma de que certifico. — José Pérez. — Benigno Taboada, secretario.

Y para que tenga efecto su inserción en el Boletín oficial segun lo previene el artículo 1190 de la ley de Enjuiciamiento civil, libro la presente certificación que firmo previo el visto bueno del señor juez, en Irijo á 31 de agosto de 1867. — Benigno Taboada, secretario. — V.º B.º — Angel Torres.

D. Joaquín Placer Rodríguez, Secre-

